JUZGADO QUINTO LABORAL DE IBAGUE TOLIMA
Ibagué, abril veintinueve (29) de dos mil veintidós (2022)
Incidente de desacato Rad: 73001-31-05-005-2022-00039-00

Agotado el trámite respectivo, procede el Despacho a resolver EL INCIDENTE DE DESACATO promovido por KENNE ANDREY CUBIDES QUIROGA contra UARIV-

ANTECEDENTES

El señor KENNY ANDRES CUBIDES QUIROGA presentó incidente de desacato, invocando el incumplimiento a lo ordenado en sentencia del 04 de marzo de 2022.

Manifiesta que el desacato en que ha incurrido la UARIV, obedece a que la fecha la entidad accionada no le ha brindado una respuesta de fondo a su petición.

El despacho con auto calendado del 18 de marzo de 2022, previo a admitir el incidente de desacato, requirió a **ENRIQUE ARDILA FRANCO** en calidad de DIRECTOR TÉCNICO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV, y a su superior **RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE**, Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV, para que informaran sobre el trámite realizado para dar cumplimiento a la orden de amparo, y al segundo para que procediera a hacer cumplir la sentencia y abriera el correspondiente proceso disciplinario contra el funcionario responsable al interior de la entidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela.

Se libraron los respectivos oficios Nros. 252, 253 del 23 de marzo de 2022, (archivos 003, y 004 del cuaderno 002) respectivamente, remitidos por correo electrónico, quienes guardaron silencio (cuad.002 arch.007).

Mediante auto del 04 de abril de 2022 se **ADMITE** el incidente de desacato contra **ENRIQUE ARDILA FRANCO** en calidad de DIRECTOR TÉCNICO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV, y **RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE** en su calidad de DIRECTOR DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV, como superior jerárquico del funcionario encargado de dar cumplimiento al fallo de tutela.

La anterior decisión les fue notificada mediante oficios Nros. 324 y 325 del 05 de abril de 2022 (archivos pdf 009 y 010 del cuaderno 02), los cuales fueron recibidos el 05 de abril de 2022, se recibió respuesta por parte del jefe de la Oficina jurídica de la UARIV (archivo pdf 015 del cuaderno 002).

Por auto del 22 de abril del año en curso, se abre a pruebas; y dentro de dicho trámite la parte incidentante arrima escrito vía correo electrónico, informando que la UARIV ya le dio contestación a su solicitud.

Agotadas las etapas procesales, es del caso ahora proceder a resolver el incidente, no sin antes hacer las siguientes:

CONSIDERACIONES

El mecanismo para la efectiva protección de los derechos fundamentales que se estableció en la Constitución Política fue la acción de tutela y para el cumplimiento de los fallos de amparo se establecieron los mecanismos del trámite de cumplimiento (Art. 27 de Decreto 2591 de 1991) y la figura jurídica del desacato, como el componente a través del cual el Juez constitucional puede determinar la actitud renuente o de rebeldía frente a la decisión judicial y consecuentemente, puede sancionar con arresto y multa a quien haya desatendido las órdenes emitidas.

La Corte Constitucional con respecto a las figuras del cumplimiento y el desacato, precisó en Auto 108 de 23 de abril de 2014 lo siguiente:

"3. En torno a estas dos actuaciones, en reciente decisión la Corte precisó **que el cumplimiento del fallo y el desacato 'son en realidad dos instrumentos jurídicos diferentes, que a pesar de tener el mismo origen -la orden judicial de tutela-y tramitarse en forma paralela, en últimas persiguen distintos objetivos: el primero, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales afectados, y el segundo, la imposición de una sanción a la autoridad que ha incumplido el fallo'**. Bajo esa premisa, en la misma providencia se sostuvo que, **'si bien en forma paralela al cumplimiento de la decisión cabe iniciar el trámite de desacato, este último procedimiento no puede desconocer ni excusar la obligación primordial del juez constitucional, cual es la de hacer cumplir integralmente la orden judicial de protección'**¹³. Por ello, sin perjuicio de que se sancione o no al funcionario obligado a obedecer el fallo, el juez constitucional tiene el deber de asegurar su total cumplimiento si ello no ha ocurrido por vía del desacato, ya que en ciertos eventos la efectividad de los derechos conculcados se logra 'a través de la adopción de medidas adicionales a la sanción por desacato, al ser este incidente insuficiente para hacer cumplir la orden proferida (...)." (Negrillas fuera de texto).

De acuerdo con esta interpretación constitucional, **el trámite del cumplimiento no es un prerequisite para el desacato, ni el trámite de desacato es la vía para el cumplimiento**, claro que puede ocurrir que a través del trámite de desacato se logre el cumplimiento, pero **ello no implica que, ante el incumplimiento de una orden de tutela, el único camino sea el incidente de desacato"**.

Con respecto a la naturaleza jurídica del incidente de desacato y la finalidad de su adelantamiento, la misma Corporación expresó, en Sentencia T-188-02, que **"En el evento de presentarse el desconocimiento de una orden proferida por el juez constitucional, el sistema jurídico tiene prevista una oportunidad y una vía procesal específica, con el fin de obtener que las sentencias de tutela**

se cumplan y, para que en caso de no ser obedecidas, se impongan sanciones que pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991".

Así mismo, debe referenciarse que la decisión sancionatoria que llegue a imponerse dentro del trámite incidental por desacato constituye una manifestación del ejercicio del poder disciplinario y, por ello, la responsabilidad de quien incurre en la supuesta omisión eminentemente subjetiva, esto es, que tal juicio de valor debe estar fundado en el dolo o la culpa de quien ha sido conminado al cumplimiento de una orden emanada del juez de tutela. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional al señalar que mientras la responsabilidad exigida para el cumplimiento del fallo de tutela es objetiva, la exigibilidad para el desacato debe ser subjetiva, no pudiendo presumirse responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento (Ver entre otras, **sentencias T-763/98, T-744/03 y SU-034 de 2018**).

Conforme a dichos parámetros, se tiene que la finalidad del fallo de tutela en el caso concreto, estaba dirigida a lo siguiente.

“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Kenny Andrés Cubides Quiroga, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

“SEGUNDO: ORDENAR al Dr. Enrique Ardila Franco, director Técnico de Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-Dirección Técnica de Reparación, que dentro de un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a resolver de fondo la petición efectuada por el actor, radicada el día 19 de enero de 2022, mediante el cual solicita información con respecto a indemnización administrativa.

En este orden de ideas, para verificarse el cumplimiento del mandato constitucional, se encuentran individualizados e identificados a **RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE** identificado con la C.C 17.347.484 en su calidad de Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV, como superior funcional del encargado de dar cumplimiento al fallo de tutela y **ENRIQUE ARDILA FRANCO** identificado con la C.C 16.927.163 en calidad de Director de Técnico de Reparaciones de la Unidad para las víctimas.

Igualmente, contamos con un ejemplar del oficio del 18 de abril de 2022 dirigido a la actora y suscrito por el Director Técnico de Reparación de la Unidad para las víctimas Enrique Ardila Franco, a través del cual se le da respuesta de fondo a la petición con rad. 20221301091872, sobre procedencia y destinatarios de la indemnización administrativa, afirmando la misma actora conocer de la misma y considera que con ello ha cesado la afectación de su derecho fundamental (archivo 022).

Siendo así, este despacho considera que no existe mérito para sancionar a los funcionarios investigados, por haber cesado la afectación de los derechos de la actora, por lo que se,

RESUELVE:

PRIMERO: ABSTENERSE de imponer sanción contra **RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE** en su calidad de Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV y **ENRIQUE ARDILA FRANCO** en calidad de Director de Técnico de Reparaciones de la Unidad para las víctimas.

SEGUNDO: La anterior determinación, comuníquesele a las partes.

TERCERO: Efectuado lo anterior, archívense las presentes diligencias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

LUISA FERNANDA NIÑO DÍAZ
Juez

Firmado Por:

Luisa Fernanda Niño Díaz

Juez

Juzgado De Circuito

Laboral 005

Ibague - Tolima

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

cd5400c269d2e4911bcd986bc52d6506aee8952f0c9e4773ebfd3a7d4523434d

Documento generado en 29/04/2022 04:02:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>